

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Cesar Augusto Gallo Machado
DEMANDADO	AFP Porvenir S.A. y COLPENSIONES
PROCEDENCIA	Juzgado 001 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 001 2021 00129 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 059 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado
DECISIÓN	Adiciona y confirma

En la fecha, **treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente a los recursos de apelación interpuestos por las apoderadas de la **AFP Porvenir S.A. y de Colpensiones**, así como el grado especial de consulta en favor de esta última, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **Cesar Augusto Gallo Machado**. Radicado único nacional 05001 3105 **001 2021 00129** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes

de la Sala el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **008**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

El demandante, pretende se declare la ineficacia y/o nulidad del traslado efectuado el 01 de diciembre de 1994, al régimen de ahorro individual con solidaridad, al no habersele suministrado una adecuada asesoría, con transparencia máxima, con libertad informada o libre, teniéndose su afiliación sin solución de continuidad al régimen de prima media con prestación definida; en consecuencia, solicita se disponga su retorno a Colpensiones, con las cotizaciones efectuadas y los rendimientos que se hubiesen generado. Pide también condena en costas.

En sustento de ello, y atendiendo lo que es objeto de revisión por parte de la Sala, afirma en síntesis que, nació el 19 de enero de 1962, efectuando cotizaciones al régimen de prima media con prestación definida desde el 24 de octubre de 1988. Que se afilió al régimen de ahorro individual el 01 de diciembre de 1994, en tanto, un asesor de Porvenir S.A., le aseguró que, si se trasladaba a dicho fondo, obtendría mayores y mejores beneficios de los que venía disfrutando en el Instituto de Seguro Social, como por ejemplo pensionarse antes de la edad requerida y con un mayor monto de mesada, sin advertirle que para ello requería un capital acumulado determinado, adicional a que tampoco se le expusieron las diferentes modalidades pensionales en ambos regímenes, ni las consecuencias adversas del acto que estaba suscribiendo. Manifiesta que el 26 de octubre de 2020, presentó derecho de petición ante el fondo privado a fin de que le entregaran constancia del contenido de la asesoría, proyección de la pensión, entre otras, remitiéndole, el 23 de noviembre siguiente, algunos documentos e informándole que al darse la asesoría verbal, no contaban con soporte o registro documental. El 29 de octubre

de 2020, solicitó a Colpensiones el traslado de régimen, respondiéndole que no resultaba procedente anular su afiliación al haberse dado en ejercicio del derecho a la libre escogencia.

En auto del **19 de enero de 2022**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enteradas de la actuación, las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación así:

Colpensiones, de los hechos tiene como ciertos, la fecha de nacimiento, la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, la solicitud de retorno al régimen público y la respuesta emitida. Los demás supuestos no le constan. **Se opuso** a la prosperidad de las pretensiones y formuló **las excepciones** de: falta de legitimación en la causa por pasiva, improcedencia de declarar ineficaz la afiliación al sistema de ahorro individual con solidaridad, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, responsabilidad sui generis de las entidades de seguridad social, imposibilidad de condena en costas, buena fe, compensación, innominada, devolución de la totalidad de los recursos cotizados y, prescripción.

La **AFP Porvenir S.A.**, frente a los hechos manifiesta que no son ciertos o no le constan, no obstante, explica que, desde el momento de la afiliación del actor a la AFP, le informó sobre las características del sistema pensional y del RAIS, como las prestaciones ofrecidas y los requisitos para acceder a ellas, esto es, que podría pensionarse a la edad que escogiera, siempre y cuando el capital acumulado en su Cuenta de Ahorro Individual, compuesto por los aportes obligatorios, voluntarios, sus correspondientes rendimientos y el bono pensional, le permita obtener una mesada superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente. Se le indicaron las características del régimen, tales como la existencia de excedentes de libre disponibilidad, la devolución de saldos, la posibilidad de heredar el capital

de la cuenta de ahorro individual, en caso de fallecer sin beneficiarios; la pensión de garantía mínima, entre otros. La asesoría proporcionada fue clara, veraz y oportuna, con elementos de juicio objetivos, para la toma de una decisión instruida, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 97 del Decreto No. 663 de 1993, pues solo hasta la expedición del Decreto 2555 de 2010 y en especial el Decreto 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015, fue que se les impuso la obligación a las administradoras de explicar a los afiliados las consecuencias del traslado de régimen. **Resistió las pretensiones**, expuso hechos, fundamentos y razones de su defensa y, formuló **las excepciones** de prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y, buena fe.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 20 de febrero del año en curso, declarando la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS, el 30 de noviembre de 1994, a través de la AFP Porvenir S.A., por falta al deber de información, ordenando a Colpensiones tenerlo válidamente incorporado al RPMPD, homologando las semanas cotizadas al fondo privado, previo el recibo del saldo de la cuenta de ahorro individual. Ordenó a Porvenir S.A. trasladar a Colpensiones, dentro del término máximo de 30 días, el saldo de la cuenta de ahorro individual, incluidos los porcentajes descontados para garantía de pensión mínima, cuotas de administración y seguros previsionales, porcentajes que deberán ser indexados. Declaró no probadas las excepciones propuestas y grabó con costas a la AFP, ordenando el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones.

Argumentó la falladora, después de citar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, que la AFP demandada no cumplió con la carga de acreditar que brindó al demandante información sobre las características, condiciones de acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, a fin de que se constituyera una

debida asesoría que permitiera dotar de eficacia la selección del régimen, disponiendo, en consecuencia, la privación de efectos jurídicos al acto de movilidad, y el correspondiente retorno de los recursos de la cuenta de ahorro individual, tal y como quedó anotado.

Inconformes las demandadas interpusieron recurso de apelación, así:

La **AFP Porvenir S.A.**, esgrime que dentro del proceso quedó acredita la información que se le brindó al actor, la cual, fue suficiente para que él de manera libre y voluntaria tomara la decisión de suscribir el formulario de afiliación, adicional a que siempre se le pusieron a la mano distintos canales de comunicación, sin que manifestara ningún tipo de inconformidad.

En caso de confirmarse la sentencia, pide se revoque la condena al traslado de cuotas de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima, debidamente indexados, en tanto, atendiendo lo establecido en la Ley, la entidad los destinó a realizar una debida gestión de los recursos e incrementar el capital ahorrado, debiéndose tener presente que los dineros correspondientes a los seguros previsionales fueron girados a un tercero a fin de que cubriera las contingencias de invalidez y muerte, por lo que una decisión de retorno de dichos emolumentos atentaría contra la sostenibilidad financiera del sistema.

Agrega que la figura de la indexación busca resarcir el deterioro o detrimento del dinero por el transcurso del tiempo, lo cual se ve compensado con la orden de devolver los rendimientos financieros, a más que de disponerse la devolución de los dos rubros generaría una doble condena y un enriquecimiento sin causa.

También solicita se le absuelva de la condena en costas, al haber obrado de buena fe y acorde con la normatividad vigente para la época, adicional a que las agencias en derecho fijadas resultan demasiado altas, atendiendo a que fue un proceso que se evacuó rápido y frente al cual existe una línea jurisprudencial reiterada, por tal, no ofrece mayor dificultad.

Colpensiones, pide se disponga tanto la devolución del 100% de los aportes, esto es, el saldo de la cuenta de ahorro individual, gastos y cuotas de administración, aportes al fondo de garantía de pensión mínima y seguros previsionales, como la prima de seguros de invalidez y sobrevivencia, reaseguro Fofafin, aportes al fondo de solidaridad pensional y bonos pensionales, debidamente indexados, al ser indispensables dichas sumas para financiar la pensión.

De la etapa de alegaciones ante esta instancia hizo uso **Colpensiones**. Si bien se aportan al proceso dos memoriales contentivos de los mismos, solo se tomará en cuenta el suscrito por la Doctora Leidy Garces, apoderada actual de la demandada, quien hace inicialmente referencia al contenido del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 modificadorio del 13 de la Ley 100 de 1993, sobre la restricción de la edad para efectos de movilidad entre regímenes, precisando que para el caso, el demandante al nacer el 19 de enero de 1962, cuenta con 61 años e inició trámite para reconocimiento, por tal, no le es dable devolverse al régimen de prima media.

Hace un paralelo entre la nulidad e ineficacia de la afiliación, para concluir que si bien en esta clase de asuntos se censura el hecho de que la administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, no proporcionó al afiliado una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información al momento del traslado, también lo es que se debe

considerar que el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales, no constituye un derecho absoluto, debiendo atender el mismo al criterio de la sostenibilidad financiera del sistema, el cual, se ve en peligro frente al resto de afiliados cuando se declara la ineficacia.

En caso de confirmarse la sentencia, pide se ordene la devolución del 100% de los aportes obligatorios efectuados por el afiliado, esto es, se disponga el traslado de las sumas correspondientes al saldo de la cuenta de ahorro individual, los gastos o cuotas de administración, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y los seguros previsionales tal cual lo concluyó la Juez de instancia, pero incluyendo además, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, la prima de reaseguro de Fogafín, frutos e intereses y los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional.

La AFP Porvenir S.A., luego de transcribir la parte resolutive de la sentencia, plantea como puntos materia de inconformidad, **la declaratoria de ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS**, por no existir razones fácticas ni jurídicas para ello, al realizarse en forma espontánea, sin presiones o apremios de ninguna naturaleza, cumpliendo la AFP con las normas que regulaban el deber de información para tal calenda y contando la actora con varias oportunidades para retornar al régimen público, lo que no hizo, siendo la motivación para iniciar este proceso la diferencia en las mesadas pensionales, agregando que como entidad administradora ha realizado campañas masivas para la educación del consumidor financiero, sin que los documentos que extraña el juez para demostrar la debida ilustración constituyeran obligación para tal época, pues ello surgió con la Circular 016 de 2016, y el buen consejo y doble asesoría se incorporan al ordenamiento jurídico en los años 2010 y 2014, tal como se explica por la jurisprudencia especializada, citando algunas radicaciones, avizorándose también incumplimiento de la parte actora en su deber de diligencia y cuidado en sus propios actos,

advirtiéndole que la totalidad de condiciones del RAIS se fijan en la ley, cuyo desconocimiento no sirve de excusa.

En el evento de mantenerse la sentencia de primer grado, solicita no condenar a la devolución de gastos de administración, prima de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, porcentaje destinado al FGPM y aportes al fondo de solidaridad pensional indexados, pues todos estos rubros están autorizados por la ley y cumplieron la finalidad a la que están destinados.

Finalmente, frente a la condena en costas, la entidad siempre obró con la buena fe objetiva, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época y buscando el beneficio de la parte demandante, por lo que la misma no encuentra sustento.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

De acuerdo con el recuento realizado, los argumentos de la apelación y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS a través de la AFP Porvenir S.A., donde actualmente permanece, y como consecuencia de ello, a la activación de la vinculación en el RPMPD administrado por COLPENSIONES, con las correspondientes restituciones económicas y los conceptos que estas comprenden, así como si hay lugar o no a su actualización mediante el mecanismo de la indexación y, a la imposición de costas procesales.

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen pensional cuando no está **precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información**, sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas que la movilidad entre regímenes debe estar precedida de la debida información y transparencia, **para el caso concreto, dado que el formulario se suscribió el 30 de noviembre de 1994**, se estaba en el primer estadio de la regulación normativa, contenida entre otras en los arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1° del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de los derechos laborales y autonomía personal, y por tanto el contenido mínimo estaba circunscrito a brindar ilustración sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, lo que incluye dar a conocer la existencia de ventajas y desventajas de cada uno, lo que supone el análisis de la situación particular de cada afiliado ante el sistema, sin que se hubiere aportado ningún medio de convicción sobre la asesoría **clara, suficiente y veraz** frente a las **características, regulación del RAIS y su funcionamiento, así como los rasgos diferenciadores con el RPM**, como se afirma en el escrito de contestación por parte de Porvenir S.A., y por el contrario, con lo manifestado en tal acto procesal se desvirtúa este argumento, **pues no le consta a la AFP la fecha de nacimiento, ni la afiliación del demandante al RPM**, pese a que de los medios de convicción allegados se evidencia certificado de ASOFONDOS donde se advierte que se encontraba en el régimen de prima media con prestación definida, entidad en la cual cotizó 5,29 semanas, según se desprende de la historia laboral, documentos que ni siquiera fueron consultados para efectos de realizar el pronunciamiento frente a los hechos,

a pesar de haberse adjuntado como anexos, lo que implica que no se dio la debida ilustración al momento del tránsito entre regímenes, y tampoco se ha cumplido con el debido acompañamiento durante su permanencia en el RAIS, sin que pueda considerarse satisfecha la debida información con una simple expresión genérica de características, o con el hecho de que el afiliado no haya demostrado en el transcurso del tiempo inconformidad alguna sobre el cambio en el sistema pensional, sino con la evidencia de que la asesoría brindada fue suficiente, exigiéndose la persuasión certera sobre que la ilustración correspondiera a la realidad y que atendía a las pautas para que se adoptara una decisión completamente libre, a voces del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 (en este último aspecto ver sentencia SL843-2022).

Sobre el deber de información en cabeza de las administradoras de pensiones, está definido jurisprudencialmente que el mismo constituye:

... una expresión de responsabilidad en una actividad profesional que se ejecuta en el marco regulatorio del servicio público de Seguridad Social, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, según lo dispone el artículo 48 de la CP, siendo las dos primeras actividades mencionadas una manifestación típica de la política pública y, la última, una materialización de la inspección y vigilancia que corresponde ejercer a través del ente especializado para el efecto. Ver sentencia SL4322-2022.

Y,

... en cuanto al deber de información exigible a las AFP, esta Corporación ha considerado que desde que se implementó el Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones y se concibió la existencia de las AFP, se estableció en cabeza de estas el deber de ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, acerca de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas (CSJ SL12136-2014, CSJ SL17595-2017, CSJ SL19447-2017, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL3464-2019, CSJ SL4360-2019, CSJ 2611-2020, CSJ SL4806-2020, entre otras).

Lo anterior, comoquiera que desde la creación de las AFP, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», prescribió en el numeral 1.º del artículo 97 la obligación de las mismas de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a

través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado» y la Ley 795 de 2003, «Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones», recalcó en su artículo 21 este deber preexistente de información a cargo de las AFP, en el sentido que la información suministrada tenía como propósito no solo evaluar las mejores opciones del mercado sino también la de «poder tomar decisiones informadas».

Debiéndose tener en cuenta que:

*...la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, **un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.** Ver, entre otras, sentencias SL1688-2019 y SL5704-2021.*

Y que no se infiere esta del formulario de afiliación con leyenda pre impresa de libertad y voluntariedad, pues,

... la simple firma del formulario de afiliación al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo, son insuficientes para dar por demostrado el deber de información. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento exento de vicios, pero no informado (CSJ SL2877-2020).

Ni se sana por actos de relacionamiento – al ser la movilidad entre regímenes un acto expreso-, y menos es posible exigir al afiliado que sea quien se ilustre acerca de la opción que le resulte más benéfica frente a su situación particular, ya que:

... exigir al afiliado una prueba de esta naturaleza es un despropósito, en la medida que la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación. El artículo 1604 del Código Civil establece que «la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo», de lo que se sigue que es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conozca las implicaciones del traslado de régimen pensional. Sentencia SL 4322-2022.

Ni se puede limitar la ineficacia por no estarse ante una expectativa legítima o un derecho consolidado, no gozar el afiliado de régimen de transición, o por estar motivado el retorno al régimen público en la diferencia de la mesada, ni se extingue la acción por prescripción, luego, acertada la exclusión de todo efecto jurídico al acto de tránsito entre regímenes efectuado por el demandante, siendo sus consecuencias idénticas a las de la nulidad – vuelta al estado anterior, explicándose por la Sala de Casación Laboral que en estos casos la AFP debe reintegrar a **Colpensiones** los saldos obrantes en la cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos. La citada AFP también deberá devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

De acuerdo con ello y por ser el precedente vigente en el órgano de cierre de esta especialidad, es el acogido por esta Sala de Decisión, sin que existan razones para su variación, máxime cuando el recurso de apelación se funda justamente en los argumentos de defensa ya analizados por la alta Corporación, sin que se constituya en una decisión caprichosa, **pues como ya se advirtió se acata el precedente vertical reiterado en más de tres providencias que constituyen doctrina probable.** (ver sentencias **SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021** reiteradas, entre otras en las **SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022, SL1055-2022, SL2484-2022**), se impone **confirmar** la sentencia

revisada en el punto atinente a las restituciones dispuestas en favor de Colpensiones, **advirtiéndose que, en caso de haberse efectuado descuento para el fondo de solidaridad pensional, este también debe devolverse debidamente indexado.** Al momento de cumplirse la orden impartida la AFP enviará a Colpensiones relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, puntos en el que se **adiciona la sentencia.**

Frente **al bono pensional**, en el evento de haberse redimido, lo procedente es su anulación.

No se está en este caso autorizando un traslado de régimen desatendiendo la restricción temporal del artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, *después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez*, sino imponiendo la sanción de ineficacia por no haberse dado una libertad informada en la elección de régimen pensional al momento del traslado, en los términos del literal b) de la misma norma, en concordancia con los artículos 271 y 271 del mismo estatuto, y 48 y 53 de la Carta Superior.

Finalmente, en lo atinente a la condena en costas, es pertinente recordar, que son aquellas erogaciones económicas que comportan la atención de un proceso judicial, dentro de las cuales se incluyen las agencias en derecho, valor que el juzgador le da al trabajo del abogado que ha triunfado en el trámite del conflicto, que deben ser asumidas por la parte que resulte vencida.

No sobra añadir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en forma reiterada ha adocinado, que las costas no son consecuencia de un proceder determinado de las partes, de suerte que no interesa para su imposición que se haya actuado de buena o mala fe (CSJ AL4123-2019). Así mismo, se ha establecido que la mentada condena contiene una obligación procesal que se «*dirige contra el patrimonio de la parte vencida y que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir*» (ver autos CJS AL3132-2017, CSJ AL3612-2017, CSJ AL5355-2017, CSJ AL2924-2022, CSJ AL2952-2022 y CSJ AL5445-2022).

Y sobre el monto, no es esta la oportunidad procesal para tal análisis, al existir trámite expreso previsto en el artículo 366 -5 del C.G. del. P., que a la letra dispone:

5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho sólo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.

Precepto aplicable en materia laboral por remisión del artículo 145 del estatuto procesal especial.

Las costas en esta instancia quedan a cargo de la AFP Porvenir S.A. a quien se desata adversamente el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$**1.160.000,00** a favor del demandante.

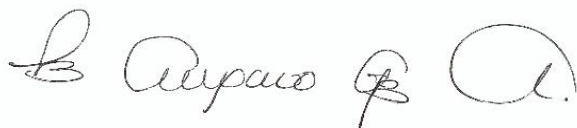
En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **adiciona el numeral tercero** de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Cesar Augusto Gallo Machado**, contra la **AFP Porvenir S.A., y**

Colpensiones, para indicar que en caso de haberse descontado dinero para el fondo de solidaridad pensional, el mismo debe ser retornado a Colpensiones debidamente indexado, y que momento de cumplir la orden frente a las restituciones, la AFP deberá enviar reporte de los conceptos, con discriminación de los respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. **En lo demás confirma.**

Costas en esta instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A., a quien se desata adversamente el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00 a favor del demandante.**

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO